

# INFORME AL COMITE CONTRA LA TORTURA DE LAS NACIONES UNIDAS

Cuestiones previas a la presentación del séptimo  
informe periódico de la Argentina

ANDRES HEIM



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

**Abril 2021**

## Contenido

Presentación.....	3
Equipo de trabajo y ejes de acción .....	5
Violencia en contextos de privación de libertad .....	7
Intervenciones recientes de la Procuraduría especializada en casos de violencia institucional ocurridos en establecimientos penitenciarios .....	14
Inspecciones a establecimientos de privación de libertad .....	21
Violencia en contextos de intervención policial o de fuerzas de seguridad ..	27

## Presentación

El presente reporte ha sido confeccionado con el fin de ofrecer información al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en el marco previo a la presentación del séptimo informe periódico de la Argentina. El mismo ofrece Información específica sobre la aplicación de los artículos 1 a 16 de la Convención, en particular respecto de las recomendaciones anteriores del Comité así como indicadores específicos que dan cuenta de algunos aspectos vinculados a la problemática de la violencia institucional.

### **Acerca de la Procuraduría de Violencia Institucional**

La Procuraduría de Violencia Institucional fue creada en el año 2013 respondiendo a la necesidad de ratificar compromisos asumidos por el Estado Argentino ante la comunidad internacional en materia prevención, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos.

En cumplimiento de su misión constitucional ante el fenómeno delictivo que deriva de la violencia institucional, el Ministerio Público Fiscal ha dispuesto diversas medidas, instrucciones generales y mecanismos de actuación fiscal en la intención de orientar su actividad hacia la debida investigación, acreditación y juzgamiento de esos hechos. En esa línea, **con la creación de una unidad especializada, adoptó una estrategia superadora y acorde a la especificidad de la modalidad delictiva, tanto en materia de investigación y acusación, como así también de asistencia y protección a víctimas y testigos de los hechos.**

Las facultades de esta procuraduría especializada responden a iniciativas adoptadas por el Estado para mejorar la protección de los derechos humanos y aplicar los principios de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Su ámbito de competencia se circunscribe a los delitos correspondientes al fuero federal y/o nacional -en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-. Ello involucra a los hechos acaecidos en establecimientos penitenciarios federales dependientes del Servicio penitenciario Federal (en adelante, SPF) y a los delitos o ilícitos cometidos por fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria) en las que sean competentes los órganos de la justicia nacional o federal de la República Argentina.

En cuanto a su dependencia funcional, la PROCUVIN es un órgano central que depende de la Procuración General de la Nación. Desde diciembre de 2017 se encuentra a cargo el Fiscal General Adjunto, Dr. Héctor Andrés Heim.

**Objetivo central:**

Prevención, investigación y eventual sanción a hechos de violencia perpetrados por acción, omisión o anuencia de funcionarios de policías, fuerzas de seguridad y penitenciarias.

**Principales funciones:**

-Promover el desarrollo de estrategias de actuación y seguimiento en casos de violencia institucional.

- Colaborar con las fiscalías que intervienen en estos casos en las diferentes instancias judiciales.
  
- Realizar inspecciones de monitoreo en espacios de privación de libertad.

## Equipo de trabajo y ejes de acción

La PROCUVIN desarrolla su actuación fiscal a partir de distintos ejes de trabajo. Por un lado, las **investigaciones iniciadas ante juzgados y fiscalías** de conformidad con las disposiciones procesales atinentes, **habeas corpus** interpuestos, las **investigaciones preliminares** y las **denuncias** originadas por esta Procuraduría referidas a violencia institucional perpetrada por fuerzas de seguridad federales (tanto policiales y de seguridad como del servicio penitenciario).

Uno de los ejes de trabajo son las **inspecciones periódicas** a los establecimientos carcelarios que permiten monitorear las condiciones de encierro y el cumplimiento de las normas en la materia, poniendo en marcha de forma inmediata acciones ante la detección de hechos de violencia institucional que afectan los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

La Procuraduría, además, **releva** sistemáticamente la ocurrencia, características y patrones de hechos de violencia institucional no sólo para el desarrollo o apoyo de causas judiciales sino para el análisis del fenómeno y la elaboración de herramientas de política criminal orientadas a la prevención, detección y persecución eficaz.

Es por ello, que con la finalidad de criminalizar conductas ilícitas consumadas por agentes estatales que afectan derechos humanos fundamentales durante encierros o despliegues de violencia por parte de fuerzas de seguridad se hace necesario un **abordaje integral** del fenómeno.

Se entiende a la violencia estatal como una serie de prácticas ilícitas que, además de estar tipificadas en el Código Penal, resultan graves violaciones a derechos fundamentales como la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas, que afectan la vigencia plena del Estado democrático de derecho. Se trata de prácticas que pueden conformar patrones estructurales de violación de derechos por parte de funcionarios de las fuerzas policiales o de seguridad siendo por ello interpretadas como prácticas multicausales y complejas.

La dependencia trabaja de manera articulada entre las áreas que la componen respondiendo a criterios de interdisciplinariedad y considerando a los delitos como fenómenos complejos en constante cambio y readaptación.

El equipo de trabajo se conforma por profesionales de distintas disciplinas -que incluyen abogados/as, una licenciada en psicología, una licenciada en sociología, una licenciada en comunicación social y una estudiante de antropología que se desempeñan bajo una estructura organizacional de tres áreas jurídicas -**Violencia policial, Violencia en Instituciones de Encierro, Litigio Estratégico y Relaciones Institucionales**- y un área no jurídica -**Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias**.

## Violencia en contextos de privación de libertad

En el presente apartado se ofrecerá un diagnóstico de la situación de las dependencias federales a partir de información que PROCUVIN procesa y publica periódicamente. Se trata de indicadores específicos que ofrecen un panorama respecto de la situación en relación a la cantidad de población, situación judicial, su composición demográfica (género, edad) y los fallecimientos acaecidos. Posteriormente se presentará una síntesis de la intervención realizada por la dependencia en causas judiciales y las acciones de monitoreo en dependencias penitenciarias.

### Principales indicadores del encarcelamiento en prisiones federales

La PROCUVIN confecciona trimestralmente informes de población encarcelada en el Servicio Penitenciario Federal. Este reporte se hace público a través de la web institucional<sup>1</sup> con el objeto de producir y difundir información de seguimiento sobre los principales indicadores de prisionalización en el Servicio Penitenciario Federal.

En los últimos años se produjo una importante suba en el número de personas detenidas en establecimientos federales. Esta suba implicó además un importante déficit en la capacidad de alojamiento ya que la cifra de plazas se mantuvo en mayor medida sin cambios.

Hasta inicios de 2020 se estaba ante un cuadro crítico de sobrepoblación dentro de una tendencia sostenida de incremento en la cifra de los privados de libertad. El ciclo de crecimiento se vio atenuado a partir de la declaración de la pandemia por coronavirus. En el ámbito local se reguló el ingreso de detenidos y detenidas a los establecimientos

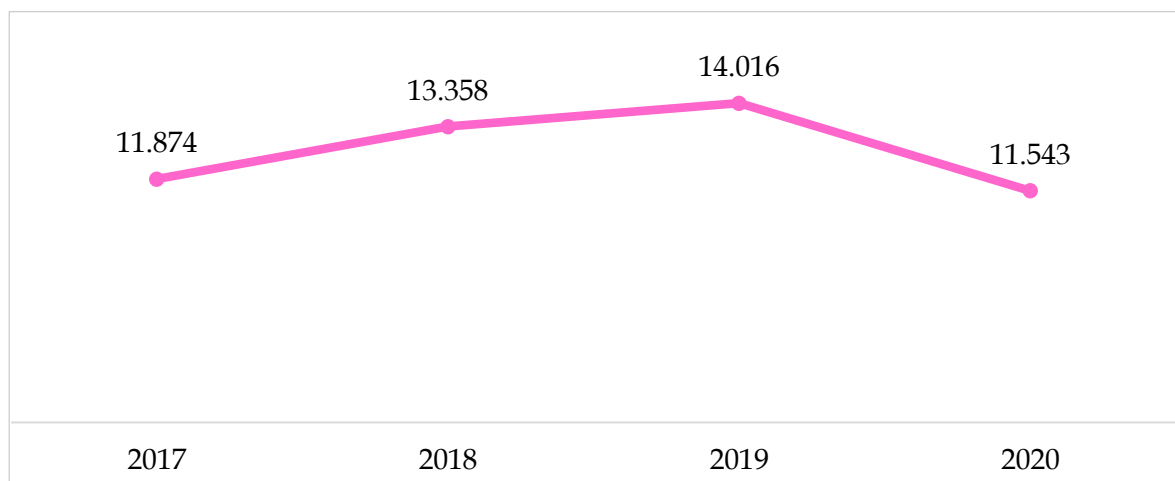
---

<sup>1</sup> Disponibles en: [http://www.mpf.gob.ar/PROCUVIN/tipo\\_de\\_recurso/reportes-de-informacion-sobre-poblacion-penal](http://www.mpf.gob.ar/PROCUVIN/tipo_de_recurso/reportes-de-informacion-sobre-poblacion-penal)



federales y se implementaron medidas para descomprimir los altos niveles de hacinamiento adoptando medidas alternativas para aquellas personas definidas en situación de riesgo<sup>2</sup>.

Gráfico 1: Evolución de la población en el SPF-2017/2020



Fuente: PROCUVIN. Elaboración propia en base a la información remitida por el Servicio Penitenciario Federal.

Al finalizar 2020, el cupo de alojamiento informado fue de 12.198 plazas, ello denota un nivel de ocupación cercano al 95% respecto del cupo informado.

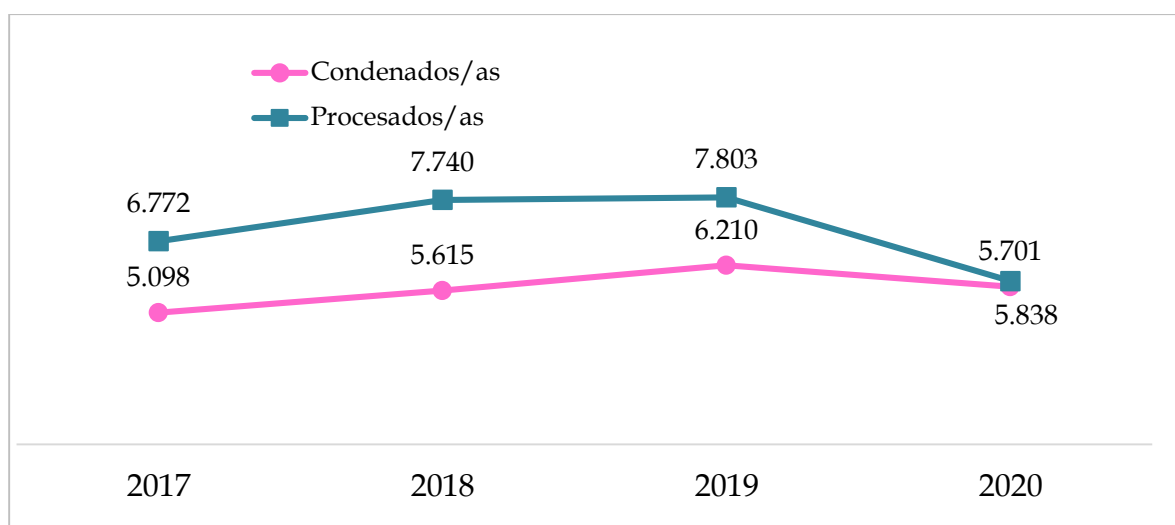
Otra de las dimensiones de análisis es la de **situación procesal** de los/as encarcelados/as, realizando el seguimiento del nivel de prisionalización preventiva por orden de jueces de fuero penal nacional y federal, según se reporta en las estadísticas penitenciarias.

<sup>2</sup> El 20 de marzo de 2020 se promulga el Aislamiento Social Preventivo y obligatorio (ASPO) mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 297/20. A partir del mes de abril desde los diversos organismos de derechos humanos y órganos judiciales se comenzó a instar a la implementación de medidas alternativas a la prisión con el fin de evitar una emergencia, ello más allá de lo delimitado originalmente en relación a los grupos de riesgo.

Específicamente el 13 de abril, la Cámara Federal de Casación Penal emite la acordada 9/20 en consonancia con las recomendaciones del CICR, la CIDH, el CNPT y la PPN, la Cámara Federal de Casación Penal en la que recomienda a los tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria.

Al finalizar el año 2020, 5.838 personas se encontraban encarceladas sin condena firme, representando el 50,6% del total de detenidos/as. La tendencia de encarcelamiento preventivo se ha mantenido y constituye uno de los indicadores críticos que se ha sostenido en el tiempo.

Gráfico 2: Evolución de la población según situación procesal en el SPF-2017/2020



Fuente: PROCUVIN. Elaboración propia en base a la información remitida por el Servicio Penitenciario Federal.

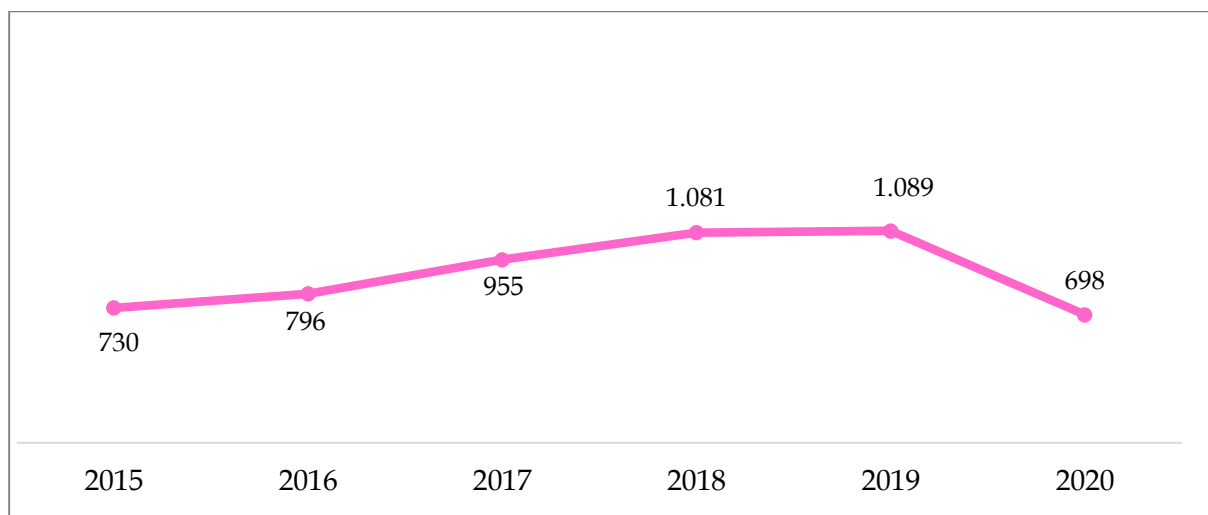
### Foco en poblaciones vulnerables

Las mujeres privadas de libertad en establecimientos penitenciarios federales llegaron a 698 en diciembre de 2020 y se informa que son 18 las personas transgénero en esta situación.

En los últimos 5 años este segmento de la población se incrementó un 50%, pasando de 730 mujeres en 2015 a 1089 (mujeres y personas transgénero) en 2019. Esta suba es significativamente mayor al

crecimiento total de la población que fue del orden del 35% para el mismo período.

Gráfico 3: Evolución de la población femenina en el SPF-2017/2020



Fuente: PROCUVIN. Elaboración propia en base a la información remitida por el Servicio Penitenciario Federal.

En este segmento de la población se observa un nivel de encarcelamiento preventivo superior a la media que alcanza al 57% de las mujeres privadas de libertad.

En diciembre de 2020 se registró la cifra de 267 jóvenes-adultos (18 a 21 años) en cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

En el caso de la prisionalización de niños/as y adolescentes, la administración de los centros de privación de libertad depende de otro órgano de la administración estatal, en este caso de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil del CDNNyA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha fuente informó que, para diciembre de 2020, un total de 38 adolescentes se encontraban privados/as de libertad en centros penales de regímenes cerrado.

## **Información sobre casos de fallecimientos en contextos de encierro y medidas adoptadas para investigar y juzgar los hechos**

PROCUVIN analiza las muertes de personas detenidas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, para ello elabora una base de datos en la que registra los fallecimientos. Este registro utiliza como fuente principal los partes informativos confeccionados por el SPF que son remitidos a la dependencia luego de cada deceso y abarca la totalidad de los decesos ocurridos bajo la órbita de los establecimientos penitenciarios federales, cuya medición resulta exhaustiva.

La obligación de llevar adelante pesquisas que puedan establecer y asignar responsabilidades por los decesos ocurridos bajo custodia estatal queda encuadrada en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (denominadas Reglas Mandela) promulgadas como tal luego de su revisión en 2015. Las denominadas Reglas de Mandela son producto de la actualización de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (promulgadas originalmente en 1955) actualización que procuró adecuarse a las transformaciones de los espacios carcelarios y en el avance de los derechos internacionales, estableciendo nuevos y más rigurosos estándares de derechos humanos para las personas bajo custodia.

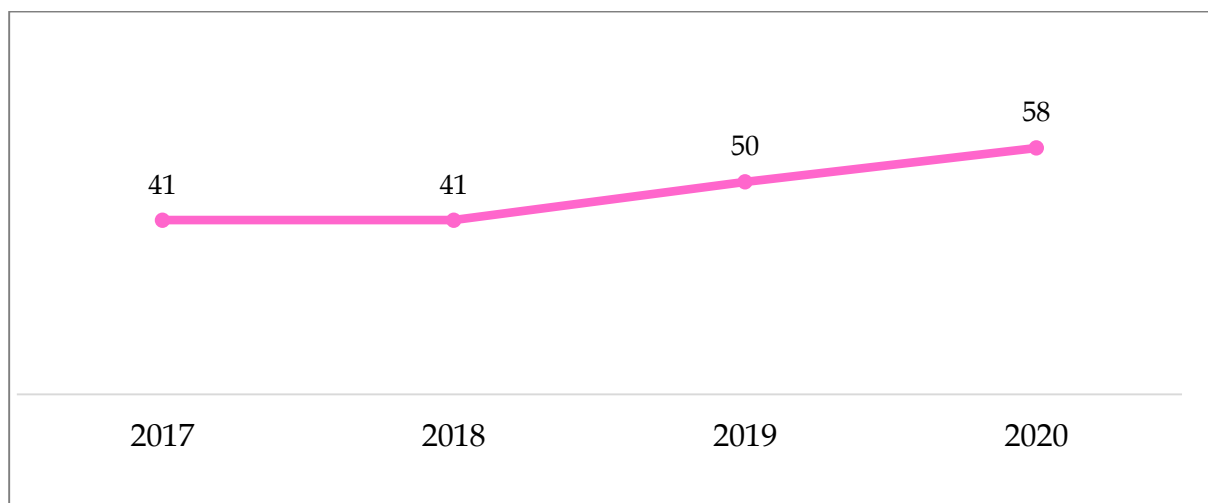
En este sentido, como parte de su política institucional, la PROCUVIN integra el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, que tiene como objetivo fundamental instar y desarrollar acciones orientadas a asegurar la vigencia de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Dicho Sistema se expidió en su primera Recomendación instando a que “en todos los casos de

fallecimiento de personas privadas de libertad, se disponga como primera media la inmediata intervención del juez y del fiscal competentes a fin de que se instruya causa en la que se deberá investigar ese deceso de manera imparcial y exhaustiva”.

Durante el año 2020 se produjeron 58 muertes de personas privadas de libertad: 8 decesos más que en el año 2019.

Esta cifra es la más alta de los últimos 5 años y cuyo promedio era de 40 fallecimientos.

Gráfico 4: Evolución de los fallecimientos en el SPF-2017/2020

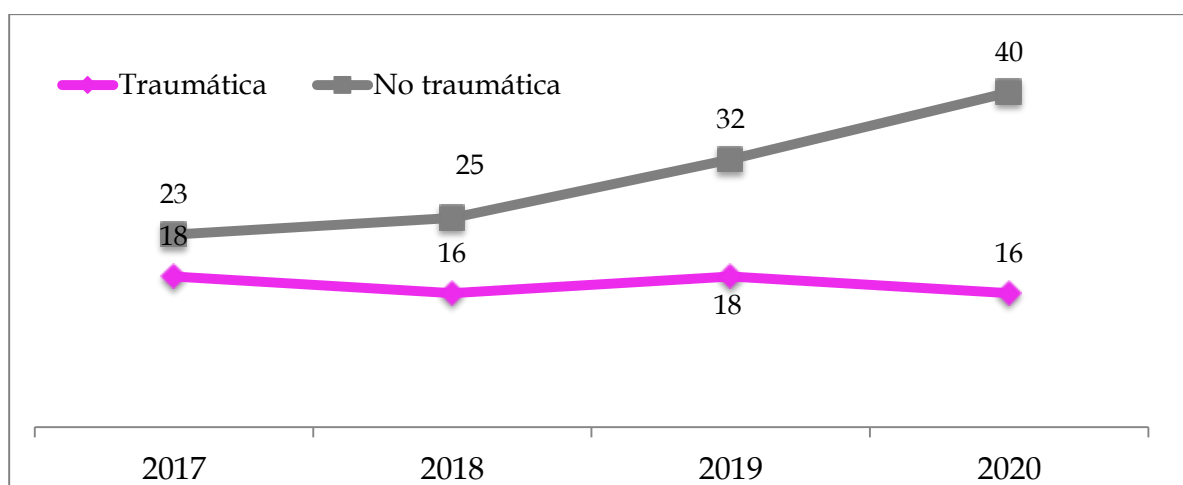


Fuente: PROCUVIN. Elaboración propia en base a la información remitida por el Servicio Penitenciario Federal.

En relación al tipo de fallecimiento, se denominarán como traumáticos o violentos, aquellos en los que el deceso no es producto de un padecimiento físico o enfermedad preexistente, sino que remite a eventos que comportan actos lesivos dirigidos a producir la muerte como su

principal causal. Se trata de muertes traumáticas cuando al deceso contribuye cualquier traumatismo, lesión o daño, sea mecánico, químico o de agente físico.

Gráfico 5: Evolución de los fallecimientos según tipo de muerte 2017/2020



\*En 2020 existen 2 casos sin especificar tipología. Fuente: PROCUVIN. Elaboración propia en base a la información remitida por el Servicio Penitenciario Federal.

Respecto de las medidas adoptadas para investigar y juzgar los hechos (tanto de las muertes traumáticas como las no traumáticas), **es relevante señalar que desde el año 2017 se han iniciado investigaciones judiciales sobre todos los fallecimientos** para dilucidar las eventuales responsabilidades de los funcionarios.

## Intervenciones recientes de la Procuraduría especializada en casos de violencia institucional ocurridos en establecimientos penitenciarios

El área de Violencia en Instituciones de Encierro focaliza sus actividades en la investigación de hechos lesivos y prácticas violatorias de derechos humanos ocurridas bajo custodia de agencias.

El trabajo se organiza centralmente en tres ejes:

Iniciar, continuar y/o dar soporte a investigaciones penales por violencia institucional en contextos de encierro bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal.

Relevar sistemáticamente esos espacios con el fin de prevenir y detectar situaciones que afecten los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y, en su caso, desplegar aquellas acciones que correspondan para que no ocurran, o cesen.

Garantizar el acceso a la justicia de las personas privadas de la libertad -y sus familiares y allegados- a través de la atención telefónica por sistema de cobro revertido.

El abordaje es integral, combinando la labor de las áreas jurídicas, de Violencia en contextos de Encierro y la de Litigio Estratégico y Relaciones Institucionales, y el Área de análisis e Investigación Interdisciplinaria.

En cuanto a las actividades de incidencia recientes, se destaca que durante el periodo requerido (2017/2020) Procuvin participó, a través de

la colaboración con las fiscalías actuante y/o en la instrucción directa de las investigaciones, en 277 casos en los que se investigan presuntos delitos protagonizados por funcionarios penitenciarios en establecimientos para la privación de libertad.

En el mismo lapso, se presentaron 88 denuncias, referentes a afectaciones de la vida intramuros corroboradas en los relevamientos de las inspecciones, las comunicaciones con las personas privadas de la libertad. Esto incluye las denuncias que se desprendieron de investigaciones preliminares.

De su lado, en 2019 se trabajó en el relevamiento y seguimiento de las acciones de habeas corpus de carácter colectivo -o de incidencia colectiva-, y en la sistematización de aquellas que estaban en trámite o habían arribado a una resolución, desde la creación de Procuvin (2013) hasta 2019.

A continuación, se describe el tipo de intervención realizada en aquellos casos que resultan más paradigmáticos por la relevancia cuantitativa del establecimiento o bien por el foco en poblaciones especialmente vulnerables.

**Causa FLP 60000615/2007 (Constantin, Rubén Oscar y otros s/ imposición de tortura -art. 144 ter. Inc. 1 y 3 del C.P.)**

Se investigan los hechos ocurridos el 9 de diciembre de 2007 en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, cuando las víctimas, Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez, denunciaron que funcionarios penitenciarios del Cuerpo de Requisa, junto con el Inspector de Servicio, ingresaron al Pabellón B de la Unidad Residencial II a raíz de una supuesta discusión entre los detenidos allí alojados. En el lugar,



golpearon a varias personas, entre ellos a los denunciantes, a quienes luego retiraron del pabellón para trasladarlos hasta la celda de alojamiento transitorio, comúnmente denominada “leonera” y una vez allí los arrojaron al piso, boca abajo, esposados con sus manos a la espalda, para luego proceder a golpearlos con intensidad en distintas partes del cuerpo, mientras ambas víctimas eran sujetadas por la fuerza en la posición descripta. Luego de retirarles el calzado por la fuerza, procedieron a golpearlos con palos y/o bastones en las plantas de los pies, tobillos y pantorrillas, práctica de tortura que se conoce como “PATA PATA”, a la vez que intentaron -sin quitarles los pantalones- introducirles en el ano los bastones con los que eran golpeados. Mientras se desplegaban dichas agresiones los guardias interrogaban a Mendoza y Núñez y los amenazaban con bajar sus calificaciones de evaluación criminológica. Luego, los funcionarios penitenciarios reintegraron a ambos detenidos a su pabellón en calidad de sancionados, previo paso por la enfermería para efectuar curaciones a las gravísimas lesiones que les habían provocado, a la vez que confeccionaron actuaciones administrativas dando una versión falsa de los hechos, con el objeto de procurar la impunidad de sus actos.

Al poco tiempo de iniciadas, las investigaciones fueron archivadas por las autoridades judiciales. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cor.IDH), como parte de una denuncia más amplia relativa a las condenas a prisión perpetua impuestas a Núñez y Mendoza, quienes eran adolescentes menores de edad al momento de los hechos imputados. La Cor.IDH condenó en 2013 al Estado Argentino por la imposición de la prisión y reclusión perpetuas a menores de 18 años, como así también por la falta de investigación y sanción de los responsables de actos de tortura en perjuicio de los jóvenes. A su vez,

estableció que el Estado debe conducir eficazmente la investigación penal de los actos de tortura, determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea. Se indicó que esta obligación debe ser cumplida en un plazo razonable, considerando los criterios señalados sobre investigaciones en este tipo de casos.

La PROCUVIN colaboró en la instancia de instrucción para la confección del dictamen de desarchivo de la causa y en el posterior pedido de elevación a juicio. A su vez, colaboró con el Fiscal ante el Tribunal Oral Federal durante el juicio oral desarrollado ante el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata entre marzo y julio de 2018, mediante la concurrencia a audiencias y se realizaron aportes para la elaboración del alegato fiscal. El 4 de julio el Tribunal dictó sentencia condenando a Rubén Oscar Constantín, Sergio Hernán Giménez y Pablo Andrés Jara en calidad de coautores del delito de imposición de torturas, y absolviendo a Jorge Enrique Puppo y Víctor Darío Salto y disponiendo su inmediata libertad. PROCUVIN recurrió en forma autónoma los puntos de la sentencia que disponían la absolución de los dos últimos imputados referidos. Al mismo tiempo, recurrió los montos de las penas impuestas a los restantes imputados, considerando que perforaban el mínimo previsto para el delito por el Código Penal argentino (art. 144 ter, inc. 1° y 3° del C.P.) en base a la errónea aplicación de la ley 26.200 que implementa a nivel nacional el Estatuto de Roma.

El 10 de junio de 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló parcialmente la sentencia impugnada respecto a los puntos planteados por esta Procuraduría. Se está a la espera del dictado de un nuevo veredicto, luego de que se resuelvan los planteos efectuados por los acusados por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

**Centro Universitario del complejo Penitenciario Federal Caba (devoto)**

**Causa 58851/2018 con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°44 cuya investigación fuera delegada a PROCUVIN (Dirección traslados del SPF por resistencia o desobediencia a funcionario público)**

Se investiga el probable agravamiento en las condiciones de detención que habría afectado a los detenidos alojados en los Complejos Penitenciarios Federales I y II, de Ezeiza y Marcos Paz, al incumplirse distintos traslados que debían haber operado en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018, al Centro Universitario Devoto. En el marco de las actuaciones se introdujo la imposibilidad por parte de la Dirección Traslados del SPF de efectuar los traslados intercárceles de internos del CPF I, II y 19 del SPF a raíz de la carencia de móviles habilitados para ello.

La intervención de PROCUVIN está encaminada a determinar si la falta de trasladados obedece o no a la situación deficitaria de disponibilidad de móviles para cumplimentar los traslados programados de los alojados en los referidos complejos carcelarios, actuaciones estas vinculadas con el expediente N°38.745/2011 en trámite ante el Juzgado de Menores N°4, que versó sobre la misma materia ahora investigada.

**Centro de detención Federal de Mujeres N°31**

**Causa 35165/15 con intervención del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 de Lomas de Zamora, cuya investigación fuera delegada a PROCUVIN**

Se investiga el hecho consistente en la posible provocación del fallecimiento del hijo de la detenida A.A.T., de nombre M., al no haberle brindado la atención oportuna y adecuada a la misma, al desoírse sus alertas en relación a los síntomas compatibles con el inicio del trabajo de parto, desencadenándose así el nacimiento prematuro de su hijo en el interior del pabellón 14 de dicha unidad, sin asistencia médica en el acto, la cual llegó minutos después de la expulsión.

En la investigación llevada adelante por PROCUVIN se encaró la investigación del hecho desde una doble perspectiva, es decir desde el trato dado a la detenida que cursaba un embarazo de 19 semanas, con un antecedente previo de aborto, y por otra parte desde la perspectiva del niño nacido en esas condiciones y la incidencia en el desencadenamiento de su fallecimiento.

### **Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza**

#### **Causa 12908/17 con intervención del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 de Lomas de Zamora, cuya investigación fuera delegada a PROCUVIN**

Los hechos que se investigan en estas actuaciones tuvieron ocurrencia en el interior del pabellón 22 módulo III del Complejo Penitenciario IV de Ezeiza, el día 13/3/17, alrededor de las 3:20hs con motivo de un reclamo efectuado por la detenida M.S., lo que motivó el ingreso de personal de la División Control y Registros y Grupo de Operaciones Anti siniestro (GOAS), haciéndolo con mangueras hidrantes que habrían sido dirigidas no solo al sector donde se había iniciado el incendio, sino también contra las internas, al igual que se utilizaron palos con los que se provocaron golpes y lesiones a algunas de ellas. En el caso de la detenida K.R., en

esos instantes sufrió una descompensación que provocó su desmayo cayéndose al piso, siendo que al recobrar la conciencia personal femenino del Servicio Penitenciario Federal le estaba tirando de sus pezones.

La investigación en curso en esta Procuración Especializada se encuentra encaminada no solo a la recopilación de los testimonios de otras detenidas y declaraciones de las víctimas, como así también la corroboración de las lesiones sufridas por algunas de ellas, en particular se encuentra encaminada a la comprobación del abuso denunciado por K.R.

**Causa con intervención del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2 de Lomas de Zamora causas N°17206/18, 58277/18 y 27250/18, cuya investigación fuera delegada a PROCUVIN.**

En esas actuaciones se investigan los hechos ocurridos en el pabellón 24 y del módulo III del Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza el 8 y 9 de marzo de 2018, en el marco de una protesta realizada por las detenidas allí alojadas a raíz de haberse enterado que no cobrarían el fondo de reserva correspondiente a ese mes, producto de lo cual intervino personal de la División Control y Registro del SPF (masculino y femenino), que habría ingresado a dichos pabellones y habría realizado una requisa en el marco de la cual habrían provocado lesiones a las detenidas. Como correlato de los daños corroborados en el marco de la protesta el Servicio Penitenciario Federal formuló denuncia contra las detenidas involucradas en la protesta, a las que atribuye la comisión de los daños.

**Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz**

**Causa con intervención del Juzgado Criminal y Correccional n°25, causa 3405/2020, cuya investigación fuera delegada a PROCUVIN**

El hecho investigado en estas actuaciones fue denunciado por el detenido N.G.Q., quien sostuvo que personal del Servicio Penitenciario Federal, a sabiendas de las situaciones conflictivas previas, lo alojó en un pabellón donde él tenía problemas con los internos, siendo que en horas del mediodía de ese sábado un grupo de detenidos que poseía una llave (la cual habría sido entregada por personal del Servicio Penitenciario Federal), ingresó a su celda con armas punzantes y empezaron a golpearlo al mismo tiempo que le refregaban los testículos en la cara 18 de enero en horas de la mañana fue derivado al complejo Penitenciario II de Marcos Paz.

## **Inspecciones a establecimientos de privación de libertad**

Dentro de las facultades de PROCUVIN se encuentra la de realizar inspecciones de monitoreo a espacios para el alojamiento de personas privadas de libertad.

En ese sentido, la realización de inspecciones en establecimientos de detención se conformó como una de las líneas de trabajo de mayor importancia de la Procuraduría, como herramienta para prevenir, sancionar y reparar posibles agravamientos en las condiciones de detención y/o hechos de violencia institucional.

En su mayoría, las inspecciones a espacios de detención se realizan mediante una modalidad de monitoreo fiscal, en forma periódica y, en ocasiones, junto con otras dependencias del Ministerio Público Fiscal y/o de otros organismos públicos y judiciales

En ocasiones estos monitoreos se realizan en conjunto con otros actores del Ministerio Público Fiscal o del sistema institucional ejecutivo, legislativo o judicial, como y también con organizaciones de la sociedad civil. En esta línea, desde la creación del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias esta dependencia integra ese espacio interinstitucional y realiza monitoreos conjuntos en cárceles.

Desde su creación, la PROCUVIN ha llevado a cabo 272 inspecciones en distintos establecimientos de encierro.

Llegados a este punto, es menester subrayar las implicancias particulares que la crisis sanitaria por el coronavirus Covid19 tuvo no solo en la proyección de tareas estipuladas por la Procuraduría para el ciclo 2020, sino en la vida de las personas privadas de la libertad.

Este eje de intervención se vio trastocado de manera muy particular. Esa actividad debió suspenderse, hasta tanto se supere la emergencia mundial, aún vigente.

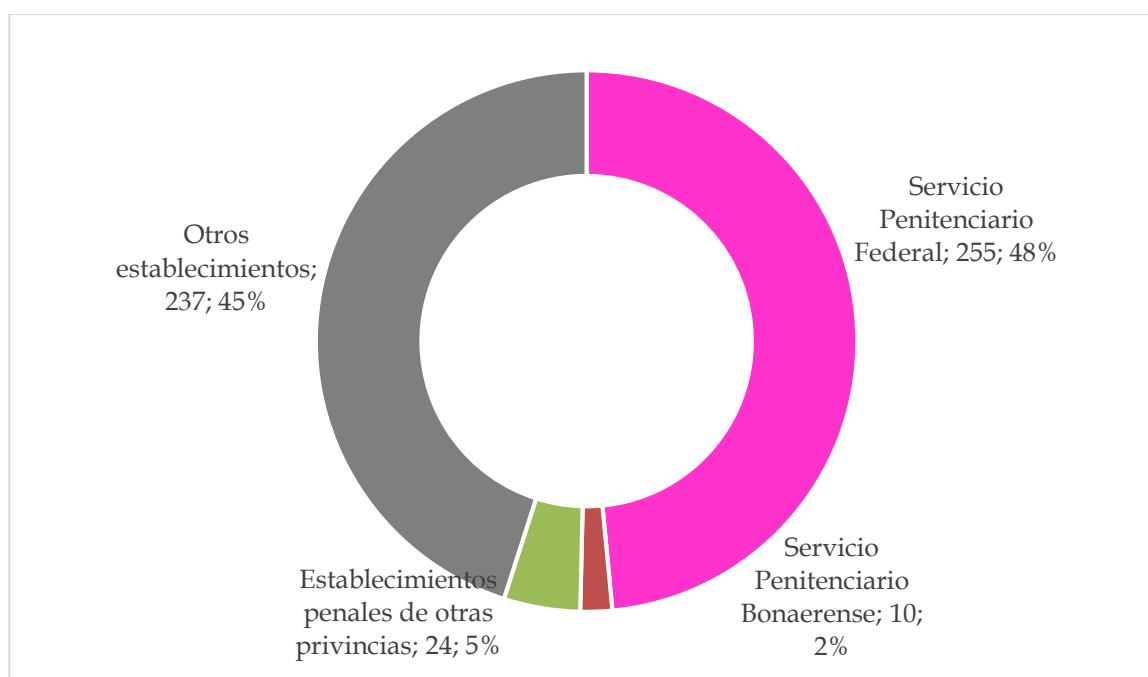
En efecto, las características del virus, supusieron –y aún suponen- un gran riesgo no solo para los agentes que debemos afrontar la inspección de cada establecimiento, sino, y en mayor medida por su vulnerabilidad, una puesta en peligro a la población carcelaria que se podría ver expuesta, con nuestro ingreso a sus lugares de alojamiento.

Sin embargo, gracias a la participación en el marco de las Mesas de Diálogo a las que se convocara a Procuvin a instancias de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, y el reforzamiento de las vías de atención telefónica y por correo electrónico, se pudo hacer un relevamiento de las unidades y complejos federales, y de los casos tanto generales como

particulares, que permitiesen, en la emergencia, desde luego, continuar trabajando sobre aspectos centrales que hacen a la vida intramuros.

Complementariamente, estos fenómenos se abordaron a través de herramientas jurídico-judiciales (investigaciones preliminares<sup>3</sup>, presentación de denuncias, habeas corpus, investigación de hechos judicializados, asistencia a juicios orales, etc.) y recursos no jurídicos de política pública (mesas de trabajo, inspecciones de monitoreo a espacios de encierro, investigaciones psico-sociales y de sociología jurídica y penal, etc.).

Gráfico 6: Distribución de las inspecciones realizadas por PROCUVIN entre septiembre 2013 y diciembre 2019, según agencia de la cual dependen.



Fuente: Base de inspecciones (PROCUVIN).

<sup>3</sup>Las investigaciones preliminares se utilizan como una herramienta de abordaje de problemáticas estructurales, con el objeto de realizar investigaciones estratégicas que pongan en evidencia los fenómenos de la violencia institucional en el ámbito del encierro por ejemplo en cuanto a las prácticas de ingreso, aislamiento, falta de asistencia médica, entre otras.

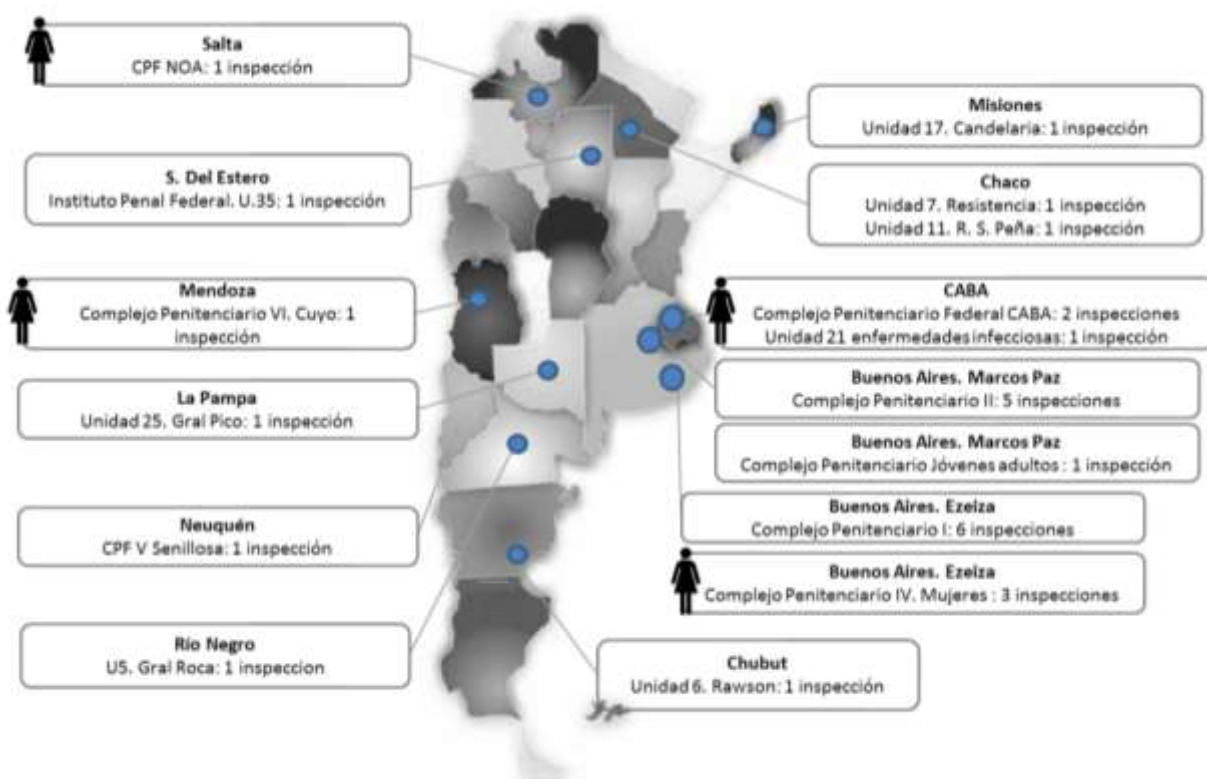


En cuanto al perfil de las inspecciones realizadas, 193 se categorizaron como de “inspecciones de las condiciones de detención” (general o temático), 57 de “cumplimiento de medidas judiciales” y 22 de carácter “mixto” (monitoreo general y cumplimiento medidas judiciales).

Las 29 inspecciones realizadas a unidades dependientes del SPF durante 2019 contemplaron la presencia en 16 de los 35 establecimientos con los que cuenta el servicio federal.

La concentración de inspecciones realizadas fue sobre los tres complejos penitenciarios federales del Área Metropolitana de Buenos Aires (Marcos Paz, Ezeiza y Devoto), dada la cantidad de población que alojan (más de la mitad de los detenidos/as en el SPF) y la proximidad geográfica a la sede institucional de esta dependencia (Ciudad de Buenos Aires) sin embargo se abarcó una importante cantidad de establecimientos de amplia distribución territorial.

Gráfico 7: Distribución territorial de las inspecciones realizadas por PROCUVIN en 2019



En 2020 se publicó la “Guía para el Monitoreo de Espacios de Detención” que condensa la experiencia de las y los integrantes de la PROCUVIN durante más de 7 años de inspecciones.

El propósito de su elaboración fue el de ofrecer herramientas y pautas que resulten de utilidad a los integrantes del Ministerio Público Fiscal u otras dependencias judiciales al momento de llevar adelante inspecciones y motivar la realización de las mismas ya que resultan esenciales para la materialización de los compromisos asumidos en la materia por parte del Estado argentino. Los monitoreos configuran un mecanismo fundamental que permite prevenir, sancionar y reparar la posible existencia de agravamientos en las condiciones de detención y/o violaciones a los derechos humanos en las instituciones de encierro.

La herramienta ofrece consideraciones prácticas que organizan las diferentes fases del monitoreo y que permiten que la presencia en la cárcel sea eficaz. Se identifican diversas etapas tales como la organización previa (de acuerdo con los diferentes objetivos que puedan plantearse), procedimientos para el desarrollo de una inspección eficiente y pautas para el posterior tratamiento de los registros y de la información recolectada. Se incluyen también algunos instrumentos de recolección de datos para orientar la mirada y poder recoger los indicadores mínimos que permitirán luego establecer un diagnóstico sobre lo relevado

### **Atención telefónica de personas privadas de libertad**

PROCUVIN cuenta con líneas de atención telefónica, con sistema de cobro revertido, para atender reclamos de personas privadas de libertad en cárceles federales o de sus familiares. Este recurso es una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la justicia y que se suma a otras disposiciones del Ministerio Público Fiscal con la intención de orientar la actuación Fiscal en pos de asegurar los derechos humanos de las personas encarceladas y hacia la debida investigación, acusación, acreditación y juzgamiento de hechos que los vulneren, obedeciendo al compromiso asumido por el Estado a nivel internacional.

En la mayoría de los casos se mantiene comunicación con la persona que sufre distintos padecimientos desde el mismo lugar de alojamiento donde sucede el hecho lesivo o donde se agravan las condiciones de detención, motivo por el cual la atención telefónica se orienta, por un lado, a la recepción adecuada de testimonios, y, por otro, a brindar herramientas para una intervención inicial efectiva. Este contacto de primera mano

luego de ser analizado puede derivar en la recepción de solicitudes de información, presentación de reclamos, denuncias y/o acciones de habeas corpus.

Durante 2020 la crisis sanitaria ha transformado a dicho canal comunicativo en un vector esencial, que además de los relevamientos diarios de casos en cada establecimiento federal, permitió tener conocimiento, en tiempo real de las situaciones que se dan, a partir de lo que comunica cada persona detenida o sus familiares.

Durante 2020 se estableció contacto con 240 personas detenidas, quienes establecieron llamadas una o más veces. Ello redundó en cerca de 700 gestiones.

A partir del contacto con la demanda presentada, PROCUVIN ha realizado diversas gestiones para dar curso a las necesidades comunicadas mediante las presentaciones a las agencias judiciales a cargo de la causa o a los representantes de su defensa.

## Violencia en contextos de intervención policial o de fuerzas de seguridad

### **Medidas adoptadas para prevenir prácticas discriminatorias o abusivas en el marco de la detención y retención policial**

En el mes de abril del año 2020, esta PROCUVIN promovió la publicación del documento “Facultades y límites a la actuación de los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en el marco del control del Aislamiento

Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO), que contiene pautas claras sobre el accionar policial durante la vigencia de esta medida de excepción, dispuesta por el Gobierno Nacional con vigencia en todo el país, en el marco de la declaración de pandemia por el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mediante el mencionado documento, se buscó informar a la población en general sobre las acciones que pueden y no pueden realizar las fuerzas policiales y de seguridad durante el ASPO, así como también recordar los derechos de las personas ante un eventual control policial. La difusión estuvo a cargo de la Dirección de Comunicación de este Ministerio Público Fiscal y circuló en medios de comunicación.

### **Capacitaciones al poder judicial**

Se han dictado diversas capacitaciones a la Dirección de Acceso a la Justicia de este Ministerio Público Fiscal, que posee diferentes sedes en barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también reuniones de coordinación para la atención articulada de situaciones de violencia institucional. El principal objetivo es establecer criterios comunes para el abordaje de casos y, a su vez, promover charlas informativas y capacitaciones a las instituciones educativas, de salud, entre otras, de esas comunidades. Ello haciendo hincapié en la necesidad de constatar las lesiones físicas sufridas por las víctimas del modo más inmediato posible teniendo como base lo dispuesto por el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o

penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) y las Resoluciones de la Procuración que receptan el mismo.

Finalmente, en el mes de marzo del año 2020, esta Procuraduría especializada publicó la guía práctica **“El testimonio por hechos de violencia institucional”**, dirigida a integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, realizada en conjunto con la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las víctimas (DOVIC).

La misma contiene una serie de recomendaciones y herramientas de trabajo orientadas a facilitar la recepción de declaraciones testimoniales a víctimas de violencia institucional, con el fin de que las personas reciban un trato respetuoso, considerado y evitar, de este modo, la reproducción de dinámicas que evoquen el momento en que sufrieron los hechos de violencia, así como también episodios de revictimización.

### **Violencia fuerzas de seguridad**

En el año **2017**, se realizó el “Informe anual. Denuncias por apremios ilegales y/o tortura en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el que tuvo por objeto relevar la cantidad de denuncias radicadas por los delitos de vejaciones, apremios ilegales y/o tortura durante el año 2017 en el fuero nacional.

Ello a raíz de las sugerencias volcadas por el Relator Especial de la ONU, Nils Melzer, en el documento A/72/178 de julio de 2017, en cuyo punto D), párrafo 70, recomienda a los Estados “establecer sistemas eficaces de supervisión y presentación de informes sobre el uso de la fuerza y la

información pertinente debe estar a disposición del público, incluidas estadísticas sobre cuándo, contra quién y por qué medios se emplea la fuerza y sobre los daños causados”.

De allí surge que durante 2017 se relevaron 369 denuncias contra personal policial de las diferentes fuerzas de seguridad federales y de la CABA, conforme el registro de la Oficina de sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Asimismo, respecto de este mismo año se llevó a cabo el estudio sobre “Niñas, niños y adolescentes institucionalizados” en conjunto con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD). De dicho informe surge que la BGD registró 70 denuncias respecto de 73 niñas/os y adolescentes, en tanto que esta Procuvin, relevó 242 denuncias, correspondientes a 247 niñas/os y adolescentes. Del total, el 89,6% involucraron a personal de Policía de la Ciudad; el 71,7% contaban con 16 o 17 años al momento de los hechos, siendo la víctima más joven de 12 años; finalmente, se estableció que 9 de cada 10 jóvenes que reconocieron haber sufrido violencia policial, eran varones.

Posteriormente, tal como fuera informado al Relator Especial sobre Torturas, en 2018, respecto de las muertes en contexto de intervención policial, se relevaron 22 casos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, corresponde aclarar que existen limitaciones que afectan la precisión de este dato, puesto que esta dependencia no recibió información oficial respecto al uso letal de la fuerza por parte de las agencias del poder ejecutivo que administraban, durante ese período, a las fuerzas policiales y de seguridad.

Es por esta razón que no se puede asegurar la confiabilidad del indicador de letalidad en intervención policial, el cual fue construido de manera artesanal y alternativa mediante la utilización de distintas fuentes secundarias (medios gráficos, organismos de la sociedad civil y el contacto con fiscalías de instrucción, entre otros).

No obstante, es posible señalar que durante 2017 Procuvin participó de la tramitación de 216 causas iniciadas para investigar hechos de violencia policial contra las personas. Del total, 51% de los casos involucraron a agentes de las fuerzas de seguridad federales, en tanto que el 37% implicó a agentes de la Policía de la Ciudad.

Ahora bien, en relación a las denuncias formuladas por esta Procuraduría, se presentaron un total de 61 y se iniciaron 37 investigaciones preliminares, de las cuales 20 fueron judicializadas.

La mayoría de estas investigaciones se iniciaron con el objeto de determinar la participación de efectivos policiales en contextos de manifestaciones públicas y protestas sociales, y otros hechos de violencia policial que tuvieron por presuntas víctimas a sectores especialmente vulnerables, tales como la comunidad LGTBI, niños/as y adolescentes, o personas migrantes.

Ahora bien, cabe destacar aquí que, a **partir del año 2018, con motivo de la transferencia de competencias a la justicia local de la ciudad de Buenos Aires, el número de intervenciones de esta Procuraduría en aquellos delitos cometidos por personal de la Policía local de la Ciudad de Buenos Aires, se vio ostensiblemente afectado.**

Ello así, toda vez que con fecha 7 de diciembre de 2017, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, sancionó la ley 5.935 que aceptó las



competencias transferidas según lo dispuesto por los arts. 1° y 2 de la ley 26.702, a la vez que en su **clausula transitoria primera** dispuso que a partir del 1° de enero de 2019 las competencias que aún no hayan entrado en vigencia en la ciudad por expresa *Resolución Conjunta del Ministerio Público, serían plenamente asumidas por el Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires.*

De este modo, como consecuencia, en la resolución conjunta DG n° 26/18, AGT n° 17/18 y FG n° 32, se dispuso la entrada en vigencia de la mayor parte de los delitos contemplados por la ley nacional 26.702 a partir del 1° de marzo de 2018, transferencia que fue efectuándose de manera progresiva, de acuerdo con los delitos enumerados en el Anexo de la ley nacional 26702.

En el año 2018 desde esta dependencia se ha tomado intervención en 70 causas penales. Asimismo, se instruyeron un total de 4 investigaciones preliminares.

Durante el año **2019** PROCUVIN participó en la tramitación de 72 causas penales y se instruyeron 6 investigaciones preliminares.

Finalmente, durante **2020** se tomó intervención en 38 causas penales, se instruyeron 7 investigaciones preliminares, las cuales finalizaron con la formulación de una denuncia penal en su totalidad, y se presentaron 34 denuncias penales directas.

### **Información sobre casos testigo.**

En orden a la información solicitada, se considera pertinente hacer alusión a algunos casos particulares trabajados por el área de violencia policial de la Procuvin.

### **Violencia policial contra personas bajo custodia.**

**1) Causa n° 28.180/2017 “Gendarmería Nacional Argentina s/incumplim. De autoridad y viol. Deb. Func. Público”** del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 2, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 24.

E.M.M. fue internado en el Hospital “*Parmenio Piñero*” como consecuencia de una pelea en la vía pública con otra persona.

En dicha causa, con fecha 1/3/21, el Juzgado dispuso el procesamiento de todos los gendarmes que estuvieron trabajando en el hospital en la función de consigna en el período indicado.

Luego, por la apelación de los imputados, con fecha 25/3/21, la Sala 6 de la Cámara de Apelaciones del fuero revocó los procesamientos dictados y dispuso la falta de mérito de los imputados, instando a que se profundice la investigación y se lleven adelante la producción de nuevas pruebas. La causa se encuentra en trámite.

### **Desapariciones forzadas**

**1) Causa FRO 22074/2014 (Casco. Desaparición Forzada-NN s/priv. ilegal lib. agrav.),** en trámite ante el Juzgado Federal N° 3 de Rosario, con intervención de la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario.

En dichas actuaciones se investigan los hechos ocurridos el 6 de octubre de 2014 en la Ciudad de Rosario, cuando la víctima, Franco Casco, fue detenida por personal de la Comisaría 7 de la Policía de Rosario, última vez que se vio a la víctima con vida.

El cuerpo de la víctima apareció flotando en el Río Paraná el 30 de octubre del mismo año. A la fecha, se encuentran procesados 32 funcionarios policiales de la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Los procesamientos se encuentran apelados por las defensas, a la espera de resolución. Mientras se continúan efectuando medidas de prueba en el marco de la investigación.

La Procuraduría colaboró sugiriendo medidas de prueba, documental y testimonial, y en la confección del dictamen con los pedidos de procesamiento de los funcionarios involucrados.

Asimismo, personal del área de violencia policial participó de la exhumación de los restos de la víctima para la realización de los exámenes de ADN que estuvieron a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). A la fecha la investigación continúa en trámite.

**2) Causa FRO N° 4430/2016 caratulada “Vivas Cristian Jesús y Otros s/Privación de la Libertad Agravada (art. 142 inc. 4)”, del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 2 de Rosario, delegada en la Fiscalía Federal N° 3 de Rosario.**

Dicha causa se inició a partir de la denuncia de la madre del joven Gerardo Escobar, con fecha 15 de agosto de 2015, por la desaparición del mismo.

Con fecha 21 de agosto de 2015 encontraron a Gerardo muerto, flotando en las márgenes del río Paraná, en la ciudad de Rosario.

A partir de entonces, se incorporaron pruebas que hicieron probable que el joven haya sido víctima de desaparición forzada, de forma previa a su deceso. Ello determinó el desplazamiento de la competencia a la órbita de la justicia federal de Rosario.

A su turno la Procuraduría requirió conjuntamente con la Fiscalía Federal competente la declaración indagatoria de los imputados en la causa.

Más tarde, con fecha 17/11/16, se decretó la falta de mérito de los imputados, fallo que fue dictado por la Sala B de la Cámara del fuero. A partir de lo cual la Fiscalía competente continuó profundizando la pesquisa y, en ese marco, con fecha 25/3/21, la Procuraduría brindó colaboración a la misma, efectuando un estudio de los antecedentes y sugiriendo la producción de nuevas medidas de prueba.

**3) Causa 46030/20 (del registro Coirón) en trámite en la Fiscalía Federal n° 1 de Bahía Blanca, caratulada “Denuncia S/Av. Delito” (FBB nro. 8604/20/12) del registro de la Secretaría n° 6 del Juzgado Federal n° 2 de la misma ciudad, en la que se investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.**

El 30 de abril del año 2020 Facundo Astudillo Castro emprendió viaje a dedo sobre la ruta provincial n° 3 desde la localidad de Pedro Luro hacia

la ciudad de Bahía Blanca, ambas localidades de la Provincia de Buenos Aires. Ese fue el último día en que se tuvo registro de que Astudillo Castro estuvo con vida, hasta que los restos de su cuerpo aparecieron el 15 de agosto del año próximo pasado en una zona de estuarios próximo a la ciudad de Bahía Blanca de esta provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la investigación, se supo que Facundo Astudillo Castro fue interceptado por policía local del Partido de Villarino, Pcia. de Buenos Aires, en dos oportunidades, la primera en horarios de la mañana de ese mismo día 30 de abril de 2020, por personal policial de la localidad de Mayor Buratovich, y luego por la tarde, promediando las 15.30 hs., por personal policial de la localidad de Teniente Origone, ambas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires.

La causa se encuentra en trámite en la Fiscalía Federal n° 1 de la ciudad de Bahía Blanca, con la intervención conjunta o alternada de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y esta Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), habiéndose incorporado recientemente al equipo de trabajo la Fiscal Federal de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, ante el apartamiento del Fiscal a cargo de la citada Fiscalía, Dr. Santiago Ulpiano Martínez.

**4) Causa 15169/19 (P-02-4208/19) de trámite en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n° 2 del registro de la Secretaría N° 124 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27:**

Resulta objeto de investigación en estos obrados las circunstancias que rodearon la desaparición del oficial 1° Arshak Karhanyan de la Policía de la Ciudad.

Procuvin colaboró en la causa en medidas puntuales requeridas por la Fiscalía, como ser el análisis de transcripciones de escuchas efectuadas con motivo de las intervenciones telefónicas dispuestas en el transcurso de la investigación. La causa se encuentra en trámite ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n° 2.

### **Violencia policial en contexto de protesta social.**

**1) Causa n° 63373/17, caratulada “Ricle Clivia s/ lesiones leves”, del registro del Juzgado Criminal y Correccional n° 60, Secretaría n° 71, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n° 60.**

En el citado expediente se investigan los sucesos ocurridos el 1° de septiembre de 2017, en inmediaciones de la Plaza de Mayo de esta ciudad, en el marco de una manifestación llevaba a cabo solicitando la aparición con vida de Santiago Maldonado, el joven que había desaparecido tras un operativo llevado a cabo por personal de Gendarmería Nacional Argentina, en el predio habitado por la Pu Lof en Resistencia, en Cushamen, provincia de Neuquén.

La Procuraduría, en consecuencia, inició la Investigación Preliminar n° 7425 en la que se recibió declaración testimonial a numerosas víctimas y, a su vez, se impulsaron diversas medidas de prueba conforme Res. PGN 4/12, vinculadas a información sobre el personal policial que integró el operativo; las actuaciones en las que diversas víctimas, varias de ellas periodistas que cubrían la movilización aquel día, fueron imputadas por los delitos de “Intimidación pública y resistencia a la autoridad”, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 5.

Tras ello, Procuvin formuló denuncia penal, la cual dio origen al expediente n° 68847/2017, el que posteriormente se agregó a la causa 63373/17 que tramita actualmente ante esta Procuraduría por delegación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n° 60.

### **Violencia policial y discriminación.**

#### **1) Actuaciones relativas n° 6890.**

A. D., de nacionalidad senegalesa, denunció que el 21 de abril de 2017, en el barrio de Constitución de esta ciudad, donde se encontraba trabajando en el sector de venta ambulante, personal policial comenzó a perseguirlo, lograron reducirlo, y luego lo llevaron detenido a la Comisaría 16 donde le robaron su dinero.

La Procuraduría formuló denuncia penal con una sugerencia de medidas de prueba, dando origen a la causa nro. 25763/17, en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional n° 33, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n° 6. Al mismo tiempo, se puso en conocimiento de dicha circunstancia al Juzgado y a la Fiscalía en donde se encontraba tramitando la causa en la que el joven fue imputado.

#### **2) Investigación preliminar n° 7436.**

El Programa Contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación informó a esta dependencia que el pasado 13/12/16 A.M.D., también de nacionalidad senegalesa, manifestó que fue golpeado durante su detención en la vía pública, ocurrida en la esquina de Salta y Brasil, de esta Ciudad. Al ser liberado, le devolvieron solo la mitad de la mercadería y fue imputado por resistencia a la autoridad (luego sobreseído).

Procuvin inició la Investigación preliminar n° 7436, en la que se impulsaron diversas medidas de prueba conforme la Res. PGN 4/12, tras lo cual se formuló la correspondiente denuncia penal con fecha 7 de diciembre de 2017.

### **3) Actuaciones relativas n° 7426.**

D.P.T., de nacionalidad senegalesa, denunció que el 29 de agosto de 2017 se encontraba vendiendo mercadería de modo ambulante en la calle Mitre, entre Pueyrredón y Castelli, de esta Ciudad, cuando dos agentes de la Policía de la Ciudad descendieron de un patrullero y se dirigieron hacia él.

Uno de ellos le propinó un golpe de puño, el otro lo arrojó sobre un vehículo que se encontraba estacionado sobre la calzada. Luego lo condujeron hacia la vereda, en tanto llegaron dos agentes que se sumaron al operativo que culminó con su detención.

Procuvin formalizó denuncia penal el 4 de septiembre de 2017 y acompañó una sugerencia de medidas de prueba que, según a entender de esta Procuraduría, resultaban conducentes para el esclarecimiento del hecho, dándose origen así a la causa nro. 52497/2017 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 17 y con intervención de la Fiscalía nro. 39.

El Juzgado recibió declaración indagatoria a los agentes de la Policía de la Ciudad Emanuel Galván y Gregorio Saavedra y finalmente dictó sus sobreseimientos con fecha 12/07/18.

### **4) Investigación Preliminar n° 6980.**



M.S., K.U., A.R.J., M.A.O.R., denunciaron haber sido víctimas de abuso policial el 17/5/17, a las 20 hs., en la intersección de las calles Boedo y Carlos Calvo, de esta Ciudad. M. S. expresó que trabajaba como vendedor ambulante en la zona y que personal policial le exigía la suma de \$200 para trabajar allí. Aseguró que, luego de un rato, quisieron quitarle la mercadería, llegaron más policías que comenzaron a golpearlo y lo tomaron del cuello. Posteriormente, dijo que fue detenido de forma arbitraria, relató que debió permanecer toda la noche detenido y que le quitaron la mercadería.

La Procuraduría llevó adelante la investigación preliminar nro. 6980 y a su término, formalizó la denuncia penal, aportando videos e informes del Cuerpo Médico Forense.

Dicha denuncia quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 5, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n° 8, formándose así las actuaciones nro. 30639/17.

#### **5) Causa n° 39592/2019, del registro Coirón.**

El día 17 de septiembre de 2019, aproximadamente a las 7 de la mañana, personal de la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en el domicilio en el que residían K.A., G.M., E.H.D. y C.N., de nacionalidad senegalesa, ubicado en esta Ciudad.

En dicha ocasión, según los dichos de las víctimas, se les habría sustraído diferentes sumas de dinero, las cuales se encontraban en las habitaciones donde residían, siendo amenazados en que no debían realizar la denuncia por el faltante del dinero, ya que, en caso contrario, realizarían un allanamiento cada quince días, resultando peor para ellos.

Procuvin realizó la denuncia penal el 19 de diciembre de 2019 ante la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones.

### **Violencia policial contra comunidades originarias**

#### **1) A 7665 Comunidad Mapuche Raquithué**

En el presente caso, la Fiscalía Federal de Zapala solicitó la intervención de Procuvin en el marco de un habeas corpus presentado por la Comunidad Mapuche Raquithué que tramita ante el Juzgado Federal de esa jurisdicción, bajo el número de causa FGR 20010/17. Aquel fue presentado en virtud de que personal de Gendarmería Nacional Argentina se encontraba en esa comunidad, a altas horas de la noche, golpeando puertas de los domicilios y preguntando por Santiago Maldonado.

Cabe señalar que la citada Gendarmería estaba siendo instigada por la desaparición del joven Maldonado. En ese marco, la Procuraduría, el 7 de diciembre de 2017, remitió una sugerencia de medidas de prueba a la Fiscalía competente.

### **Violencia policial contra personas transgénero**

#### **1) Actuaciones relativas n° 7938.**

C.A., G.V. y A.B. denunciaron haber sido víctimas de un allanamiento ilegal en el cual fueron maltratadas por personal policial. El hecho ocurrió el 19 de febrero de 2018.

En concreto, se denunciaron irregularidades cometidas en el marco de allanamientos llevados a cabo por parte del Departamento Unidad

Federal de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, en tres domicilios de la Villa 31 de esta Ciudad.

Las denunciantes manifestaron que se aplicó una fuerza excesiva, incluso contra niñas, niños y adolescentes, y que se requisaron exhaustivamente objetos personales que no estaban incluidos en la orden.

En relación a la discriminación sufrida por las Sras. A. y V. en razón de su identidad de género, la primera indicó que los agentes se habrían dirigido a ella profiriendo palabras humillantes y discriminatorias delante de sus hijas, diciéndole específicamente “maricón”.

Luego de recibidas las declaraciones, la Procuraduría dispuso la elaboración de un informe interdisciplinario, la reserva de identidad de las víctimas y la formulación de la denuncia penal, mediante oficio con sugerencia de medidas probatorias.

## **INFORMACIÓN SOBRE CASOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS POR EL CAT.**

En relación a los casos señalados por el Comité Contra la Tortura, en particular, aportamos la información que a continuación se detalla:

### **1) Lucas Cabello: causa N° 66248/2015, caratulada “Ayala Ricardo s/ homicidio agravado”.**

El oficial de policía Ricardo Ayala, miembro de la -entonces- Policía Metropolitana, intentó matar a Lucas Cabello el 9 de noviembre de 2015 cerca de las 15:45 en la puerta de su casa, ubicada en Martín Rodríguez al 500.

Oportunamente la Procuraduría colaboró en la etapa instructoria y, posteriormente, en la requisitoria de elevación a juicio de forma conjunta con la Fiscalía de Distrito del Barrio de la Boca.

El juicio fue sustanciado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1, el que con fecha 5 de diciembre de 2019 condenó a 16 años de prisión al policía por el delito de “tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido abusando de la función policial y por el uso de arma de fuego”.

Además, le fijaron una inhabilitación de diez años para tener o portar armas y para ejercer labores de seguridad.

Si bien no se dispuso su detención hasta que la condena adquiriera firmeza, le fijaron al condenado una serie de condiciones para cumplir. Los magistrados dispusieron enviar copia de la sentencia al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y ordenaron la extracción de testimonios de una parte de la sentencia para que se investigue a los miembros de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el sumario de Cabello, para dilucidar si cometieron el delito de encubrimiento o de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En la causa prestó colaboración también la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), en el acompañamiento del joven Cabello.

**2) Ataque a miembros de la comunidad mapuche ‘Vuelta del Río Pu-Lof’, departamento de Cushamen, en enero de 2017.**

En este caso, la Procuraduría inició la Investigación Preliminar N° 6369, a partir de un pedido de intervención efectuado por la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que ya había tomado contacto con la Fiscalía Federal de Esquel en relación al conflicto por el tren “La Trochita”.

Puntualmente, se había tomado conocimiento, a través de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), que personal de Gendarmería Nacional estaba llevando a cabo un desalojo violento en contra la Comunidad Mapuche Cushamen. Esta información se recibió el día 10 de enero de 2017.

Es así que se dispuso recabar información en relación al procedimiento llevado a cabo en el sector ocupado por el Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, para determinar la posible comisión de delitos de acción pública por parte del personal de Gendarmería Nacional que llevó a cabo el operativo y la responsabilidad de las fuerzas federales y de aquéllas que hubieran actuado en coordinación con ellas en los hechos.

Luego, fue recepcionado un oficio por la Fiscalía Federal de Esquel, requiriendo la remisión de la investigación preliminar por existir identidad de objeto con la investigación llevada a cabo en el marco del expte. FCR nro. 93/2017.

En función de ello, se procedió a la remisión sugiriendo la realización de medidas probatorias, atento la especificidad de la Procuraduría, continuando su tramitación a cargo de la Fiscalía competente.

### **3) Rafael Nahuel.**

En particular, respecto al fallecimiento del joven Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 durante el operativo de Prefectura en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, se informa que esta Procuraduría no ha tenido intervención.

### **4) “Marcha del día de la Mujer” 8/3/17 - CABA**

La Procuraduría inició una investigación preliminar a raíz de los hechos ocurridos el día 8 de marzo de 2017, a partir de las 21.00 horas aproximadamente, en inmediaciones de la Catedral Metropolitana y de la Plaza de Mayo de esta Ciudad, los cuales habrían consistido en un accionar violento e injustificado, por parte de las fuerzas de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así, las denunciantes señalaron tres intervenciones en las cuales la Policía hizo uso de un accionar ilegítimo y violento.

De los diferentes relatos recabados de las víctimas, surge que varias de ellas habrían sufrido requisas vejatorias, las cuales incluyeron diferentes modalidades de violencia de género y trato discriminatorio en razón de la identidad de género y la orientación sexo afectiva de las denunciantes.

En virtud de los hechos denunciados, desde el equipo de trabajo del área de Violencia Policial se articuló con la Unidad Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) para la recepción de declaraciones testimoniales a las víctimas y, asimismo, se trabajó en la elaboración de la denuncia penal conforme estándares internacionales y nacionales sobre protección de las mujeres y disidencias, la cual una vez formulada dio inicio a la causa causa n° 22765/17.

**6) “Marcha de maestros” 9/4/17 - CABA.**

A partir de los testimonios brindados por los Secretarios de la Unión de Trabajadores del Estado (UTE) y del gremio docente CTERA en la sede de la Procuraduría, se instruyó una Investigación preliminar n° 6791, para llevar adelante diversas medidas probatorias en orden a acreditar los hechos ocurridos el día domingo 9 de abril de 2017.

En esa oportunidad, un grupo de docentes se reunió alrededor de las 12 horas en la Plaza del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires, junto con los operarios contratados para montar sobre la vereda una estructura de caño que simulaba ser una escuela itinerante.

Al poco tiempo, personal policial de la Comisaría 6ª requirió a los docentes que debían desmontar lo hecho, continuar la actividad al día siguiente, y que debían solicitar la autorización correspondiente al Ministerio de Espacio Público. Es así que unos 200 docentes presentes allí se ubicaron alrededor de la estructura con el objetivo de impedir el accionar de la policía y el decomiso.

Alrededor de las 19 horas, el grupo de contención del DOUCAD, en medio de las negociaciones entre el gremio y las autoridades policiales, avanzó en dirección a los/as docentes, propinándoles patadas, golpes con los bastones y escudos, y arrojando gas pimienta indiscriminadamente.

La intervención policial se extendió alrededor de veinte minutos.

La raíz de estos hechos los docentes J.M. M. y M.A.A. fueron detenidos, trasladados a la Comisaría 6a, y luego a la Comuna 4. Contra los nombrados se inició la Causa nro. 23.327/2017 caratulada "Mauro, Juan

Manuel; Acuña, Miguel Ángel si resistencia a la autoridad o desobediencia a funcionario público".

Trasuntada la investigación preliminar una vez impulsadas la totalidad de medidas probatorias indicadas en Res. PGN 4/12 (informes sobre las fuerzas de seguridad intervinientes, cámaras de seguridad instaladas en el lugar de los hechos, etc.), con fecha 29/06/17 la Procuraduría procedió a cerrar la misma y formalizar la correspondiente denuncia para la investigación de los hechos.

**7) "Manifestaciones contra la reforma de las pensiones" 14-18/12/17 - CABA.**

La Procuraduría inició la Investigación Preliminar N° 7829 a raíz de la represión denunciada por manifestantes, ocurrida el día 14/12/17 en las inmediaciones del Congreso Nacional.

Allí se recibieron denuncias de varias personas afectadas, actuaciones que fueron remitidas oportunamente al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 12 de la Capital Federal, ante el cual se instruían las causas N° 20270/2017 y 4412/2018, correspondientes a tales hechos.

En relación a los hechos ocurridos el 18 de diciembre de 2017, la Procuraduría inició una Investigación Preliminar para determinar lo acontecido. En el marco de las medidas probatorias ordenadas, se tomó declaración testimonial a numerosas víctimas, en particular al joven Alejandro Rosado, quien se encontraba hospitalizado tras haber sido atropellado por dos agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Federal Argentina, recibiendo tras ello un disparo en la zona abdominal mientras yacía en el suelo.



Una vez impulsadas la totalidad de diligencias dispuestas conforme Res. PGN 4/12, la investigación preliminar fue remitida al Juzgado Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, al tomar conocimiento de la existencia de una causa en trámite que versaba sobre el mismo objeto procesal.

Al respecto, se informa que se trató de la causa CFP N° 20637/2017 (caso Coirón 35254/20), caratulada “NN y Otro s/Averiguación de Delito, Lesiones Graves (art. 90) y Abuso de Autoridad y Viol. Deb. De Funcionarios Públicos (art. 248)”, del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, Secretaría N° 23, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.

Dicha causa se inició a partir de la recepción de la denuncia del personal médico del Hospital Penna, a raíz de las lesiones que presentaba el H.P.

El mismo había sufrido el estallido del globo ocular derecho, aparte de otras lesiones corporales, por improntas de balas de goma, mientras se desplazaba haciendo su trabajo de cartonero, a cuatro cuadras del Congreso Nacional, esa tarde del 18 de diciembre de 2017.

Posteriormente, en el año 2020 y a requerimiento de la Fiscalía competente, la Procuraduría efectuó una evaluación completa de la causa y sugirió medidas probatorias tendientes al relevamiento, lo más completo posible, de las consecuencias sufridas por las víctimas, integrantes de la movilización como ajenas a la misma.

En el marco de esta causa, hubo una requisitoria parcial de elevación a juicio, para los imputados Dante Barisone, por un lado y Alfredo Martín

Luna y Franco Eloy Gerbán, por el otro; el primero de los nombrados, perteneciente a la Policía Federal Argentina y los dos restantes, pertenecientes a la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales fueron requeridos por hechos diferentes, con dos víctimas distintas y acontecidos en diferentes lugares, dentro de las cercanías del Congreso Nacional.

El primero de los nombrados, integrante del Grupo de Operaciones Motorizadas, quien atropelló al joven cartonero Alejandro Rosado, como se dijera, fue condenado el 12/10/2020 a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años, por considerarlo autor penalmente responsable de las lesiones graves, agravadas por abuso de función como miembro de las fuerzas de seguridad, por el Tribunal Oral Federal N° 3 de la Capital Federal.

#### **8) Manifestaciones del 5 de marzo de 2018.**

En relación a los hechos ocurridos en la manifestación mencionada, se hace saber que la Procuvin no ha tenido intervención.